

Santiago, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que en este procedimiento ordinario sobre responsabilidad contractual ante el Tercero Juzgado de Letras de Iquique, bajo el rol C-4699-2017 y caratulado “Empresa Constructora Vergara Fernanda Ltda con Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A”, se ha ordenado dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandante en contra de la sentencia de nueve de junio de dos mil dos mil veintiuno dictada por la Corte de Apelaciones de Iquique, que confirmó el fallo de primer grado pronunciado el diecinueve de marzo de dos mil veinte, por el que se rechazó la demanda de indemnización de perjuicios en responsabilidad contractual en la prestación deficiente de un servicio de mantención de un vehículo motorizado.

Segundo: Que la recurrente sostiene que en el fallo recurrido se han infringido los artículos 1698 y 1547 del Código Civil. Asegura que la prueba documental acompañada por su parte acredita los perjuicios que fueron demandados, y que la sentencia recurrida le impone la obligación de acreditar la infracción a los deberes de la demandada en la ejecución de los servicios prestados en la mantención de su vehículo, correspondiendo a la otra parte acreditar que ejecutó sus labores con la debida diligencia o cuidado.

Tercero: Que la sentencia de primera instancia analizando la prueba rendida por la demandante determinó que no justificó el dominio del vehículo cuyos daños solicitó en la demanda, careciendo de legitimación activa. A lo anterior, agregó, no indicó de que forma el incumplimiento contractual había originado los perjuicios inmateriales lo que debió probar más aún considerando que se trata de una persona jurídica, no bastando en su determinación el puro incumplimiento contractual.

Por su parte, conociendo del recurso de apelación de la demandante, la Corte de Apelaciones confirmó la decisión de primer grado, y si bien determinó que a la fecha de los hechos el vehículo se encontraba inscrito a nombre de la actora, del resto de las probanzas solo puede advertirse que dicho bien fue llevado a diversos establecimientos para ser revisado, sin que



los antecedentes aportados tengan la entidad suficiente para tener por acreditado el daño patrimonial y moral cobrado.

Cuarto: Que las transgresiones que la recurrente estima se han cometido por los jueces de alzada al rechazar la demanda persiguen desvirtuar -mediante el establecimiento de nuevos hechos- el supuesto fáctico fundamental asentado en el fallo impugnado. Al respecto, cabe señalar que los hechos determinados en una sentencia corresponden al resultado de la ponderación judicial de la prueba rendida en el juicio y esta actividad de análisis, examen y valoración del material probatorio se encuentra dentro de las facultades privativas de los sentenciadores que no está sujeto al control del recurso de casación en el fondo, salvo que se haya denunciado de modo eficiente la vulneración de las leyes reguladoras de la prueba que han permitido establecer el presupuesto fáctico que viene asentado en el fallo, lo que, en la especie, no ocurre.

En efecto, no existe contravención del artículo 1698 del Código Civil, ya que esta regla se infringe cuando la sentencia obliga a una de las partes a probar un hecho que corresponde acreditar a su contraparte, esto es, si se altera el onus probandi, lo que en este caso no ha ocurrido, pues a la actora correspondía acreditar los supuestos de la relación contractual que fundamentó su demanda, así como su falta observada y la relación de causalidad entre aquella y los daños que alegó, cuya naturaleza y entidad también le corresponde acreditar.

Por lo demás, tratándose de instrumentos privados aquellos que acompañó en sustento de su pretensión, no se indicó ni se desarrolló en modo alguno la transgresión a los artículos 346 del Código de Procedimiento Civil en relación al artículo 1702 del Código Civil, como tampoco a las normas sustantivas de los artículos 1545, 1546, 1556, 1557 y 1558 del Código Civil, que regulan los elementos de la responsabilidad contractual cuyo estatuto se invoca en la demanda y que los jueces no dieron por establecido. Las alegaciones esgrimidas en el recurso se



orientan más bien a promover que esta Corte realice una nueva valoración de la prueba documental, actividad que resulta ajena al recurso de casación.

Quinto: Que en mérito de lo expuesto el recurso de casación en el fondo en estudio no podrá prosperar, por adolecer de manifiesta falta de fundamento.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 772 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se **rechaza** el recurso de casación en el fondo interpuesto por el abogado Miguel Angel Castro Soto, en representación de la parte demandante, en contra de la sentencia de nueve de junio de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de Iquique.

Regístrese y devuélvase.

N° 44.920-2021.



Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Juan Eduardo Fuentes B., Arturo Prado P., Mauricio Alonso Silva C., María Angélica Cecilia Repetto G. y Abogado Integrante Raul Fuentes M. Santiago, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

